



La protesta social en la Jagua de Ibirico

Sebastián Valencia
Consultor

La protesta social sucedida el fin de semana pasado* en el municipio de La Jagua de Ibirico en el Cesar, reseñada por los medios de comunicación, principalmente, por la visita que hizo el presidente Uribe, al día siguiente a los disturbios, encuentra razones más allá de las quejas que sobre los efectos de la contaminación ambiental han señalado dichos medios.

Es necesario ubicar la problemática que afecta a la ciudadanía de la Jagua en dos ejes básicos: el primero, relacionado con la explotación del carbón que realizan varias empresas multinacionales; y el segundo, con la situación política que se refleja en profundos niveles de corrupción en la gestión pública y afecta las dimensiones sociales, económicas y culturales del municipio y de la región en general.

Primer eje: La explotación del carbón en la Jagua se viene realizando desde hace unos 30 años de manera artesanal, pero desde la década de los noventa se instalaron en la región varias empresas de explotación minera que de manera intensa han extraído inmensas cantidades de carbón.

Producto de la explotación industrial del carbón se pueden sacar varias consecuencias que explican las razones que originaron la protesta social: la situación ambiental y el impacto de la actividad de extracción en las dinámicas productivas de la región. Como lo reseñó un medio de comunicación escrito, la Procuraduría ha efectuado serios reparos al proyecto la Loma (Vereda de La Jagua) que actualmente ejecuta la Drummond desde 1987: “La Procuraduría detectó que en los predios aledaños a la actual explotación de La Loma se observan grandes montañas de estériles que no han sido dispuestas y que con el aire se dispersan en la atmósfera, llegando finalmente al ganado, a la vegetación, a las fuentes hídricas e incluso son inhaladas por los vecinos de la zona”¹.

Pero también la industria del carbón ha tenido un impacto negativo en el contexto productivo de la región. En la década de los ochenta la Jagua y la

* 10 de Febrero de 2007

¹ Periódico el Espectador, Edición del 11 de Febrero de 2007.

región sur del Cesar se caracterizaban por sus cultivos de algodón y por su explotación ganadera, pero fruto de los efectos económicos de la apertura de principios de los noventa, la actividad productiva se vino abajo y las opciones de desarrollar procesos exitosos fueron escasas. En ese marco la industria del carbón aparece como el sector fundamental para la productividad de la región, pero dicho impacto ha sido poco notorio. A pesar de generar recursos en regalías que entran directamente a los municipios, el impacto en la dinámica productiva de la región es escaso. Son pocos los empleos que se brindan a los habitantes y la región no tiene capacidad para ofrecer infraestructura y servicios a las Multinacionales, solo gente que sirve para asear y para *palear* carbón. En conclusión, la economía del carbón desde las empresas mineras que producen miles de millones de dólares al año, están aisladas de la economía de los municipios a los que pertenecen las minas.

Segundo eje: Para comprender mejor las razones de la protesta social, ésta tiene fuertes raíces en la inmensa corrupción que aqueja al municipio. Los recursos de regalías convirtieron a la Jagua, y de manera particular a la Alcaldía, en un preciado botín que perdió el sentido de la gestión y ejecución de recursos para convertirse en el mayor espacio de oportunidad para apropiaciones particulares de inmensos recursos. La posibilidad de desarrollo local que implicaban las regalías para un municipio como este se vio totalmente parada por la acción de diferentes actores que desarrollaron estrategias de captura del Estado, corrupción administrativa y la extensión de los beneficiarios de la corrupción con lo que se gana en “cierta legitimidad, o sostenibilidad política de las practicas corruptas en tanto los beneficiarios se amplían”.

La presencia de las autodefensas al mando de alias Jorge 40 y alias Tolemaida, les permitió apropiarse de inmensos recursos a través de contratos ficticios y cobro de porcentajes a muchos contratistas del Municipio, dicha estrategia se apoyó en la violencia que registró asesinatos de más de 200 personas en los últimos cinco años a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Para los paramilitares la estrategia de captura del Estado fue bastante eficaz en La Jagua, tanto la presión ejercida a través de la fuerza como las alianzas con políticos permitió consolidar un poder económico fruto del poco control sobre las regalías lo que generó oportunidades de apropiación ilegal.

Otros actores relevantes en la corrupción han sido los grupos políticos regionales que en asocio con los paras, y en muchas ocasiones de manera independiente, lograron apropiarse de miles de millones a través de la “inversión” en las campañas políticas, cuyas ganancias se obtenían posteriormente a través de la entrega de contratos y obras a personas cercanas a los políticos, entre otras estrategias.

Por último, la poca capacidad administrativa del Municipio ofreció tanto las posibilidades de acción para autodefensas y políticos, como para los funcionarios, que una vez nombrados en sus cargos después de cada elección, ejecutaban

acciones corruptas en aras del mayor aprovechamiento en el menor tiempo posible.

Ante los grandes niveles de corrupción, nunca se contó con la posibilidad de ejercer las diferentes formas de control a la gestión pública posibles. Entidades de control y organismos competentes fueron mudos testigos de las constantes pérdidas de recursos y acciones criminales de los paras; pero lo más grave fue que los mismos corruptos desarrollaron una estrategia que neutralizó la capacidad del control ciudadano y generó una dinámica que pervierte cualquier dinámica para construir proyectos desde la sociedad. Se generó una forma de relación entre administración municipal y ciudadanos centrada en la entrega de ordenes de servicio (se estiman en unas 3000 ordenes en un solo año, por una cuantía de \$8 millones en promedio por orden) que sirvió como manera de democratizar parte de los recursos de las regalías.

Rechazando de antemano cualquier hecho de violencia que distorsione la protesta social, lo sucedido en La Jagua de Ibirico refleja un inmenso problema centrado en la ausencia de un sentido de lo público, que no es solo de los funcionarios, sino que también es un problema de la sociedad. La conciencia de lo público, parte de una identidad de valores entre los que habitan un territorio específico. Identidad que no se consolida en La Jagua por la prioridad que se han dado a los intereses personales y que los grupos de poder han logrado mantener en todos los niveles, más allá de la distribución y ejecución de los recursos públicos.

La protesta ciudadana del pasado fin de semana genera sorpresa, pero también permite esperanzarse en un despertar en la conciencia de la ciudadanía y en la necesidad de exigir una garantía adecuada de sus derechos fundamentales, empezando por la vida que se pone en riesgo por la contaminación ambiental y siguiendo por lo derechos políticos y colectivos, que se han visto disminuidos por la incapacidad del Municipio de cumplir con sus objetivos mínimos y han marginado a la gente a través de violencia y corrupción. El reto consiste en que la misma ciudadanía asuma con fortaleza una labor de control y se cambien las prácticas que consisten en exigir órdenes de servicios, en lugar de proyectos y obras que ayuden a garantizar los derechos fundamentales.

Por último, es necesario hacer una corta referencia a la forma de intervención del Presidente de la República. El hecho de ordenar Ministerio por Ministerio una serie de acciones a realizar, refleja no la construcción de una política pública que se sustente en un proceso de toma de decisiones, sino en la necesidad de visibilizar una presencia institucional sin tener en cuenta sus efectos a largo plazo: ¿Con qué capacidad queda el Municipio después de la intervención nacional?, ¿las acciones desde los diferentes Ministerios en que aportan para la gobernabilidad en el nivel local?, ¿cómo fortalecer un proceso que no sea distorsionado por el próximo proceso electoral, que permitirá saber, el impacto real del proceso de desmovilización?

